



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Magistrada sustanciadora: MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ

Santa Marta, once (11) de febrero de dos mil veinte (2020)

Expediente: 47-001-2333-000-2014-00241-00
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN -
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO; CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN; ACE SEGUROS S.A. HOY CHUBB SEGUROS S.A., (LLAMADO EN GARANTÍA POR LA CÁMARA DE COMERCIO) – UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA – DIANA BOVEA MENDINUETA – MIGUEL ÁNGEL POLO CAMPO – JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA (VINCULADOS).
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Tema: ERROR JUDICIAL POR ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL (LA PRIMERA AUDIENCIA QUE SE SUSPENDIÓ FUE EL 07 DE MARZO DE 2017 PARA VINCULAR A LOS ARBITROS)

1.- ASISTENTES (min: 00:00 -)

1.1.- Parte Demandante:

Unión Temporal Obras Temporales de Santa Marta.

Apoderado: Luis Alejandro Corzo Mantilla

Cédula de ciudadanía: 88.213.988 de Santa Marta

Tarjeta profesional: 101.576 C.S.J.

Correo electrónico: alejocorman@gmail.com

1.2. Demandado:

Cámara de Comercio de Santa Marta.

Apoderado: Cristian Alberto Meriño Segre

Cédula de ciudadanía: 85.154.867 de Santa Marta

Tarjeta profesional: 221.529 C.S.J.

Dirección apoderado: _____ Santa Marta - Magdalena.

Correo electrónico entidad: camarasm@ccsm.org.co

Correo electrónico apoderado: cristianccj@hotmail.com

1.3. Demandado:

Ministerio de Justicia y del Derecho

Apoderado: Ligia Patricia Aguirre Cubides

Cédula de ciudadanía: 52.027.521 de Bogotá

Tarjeta profesional: 114.521 C.S.J.

Dirección: Carrera 9 N° 12c -10 Bogotá

Correo electrónico: notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co

1.4. Demandado:

Universidad del Magdalena

Apoderado: Claudia Milena Katime Zúñiga

Cédula de ciudadanía: 36.724.902 de Santa Marta

Tarjeta profesional: 143.914 del CSJ

Dirección:

Correo electrónico: claudiakatime@yahoo.com

1.5. Llamado en garantía:

ACE SEGUROS S.A. – HOY CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A

Apoderado: Manuel Fernando Rodríguez Soto

Cédula de ciudadanía: 1.010.222.461 de Bogotá

Tarjeta profesional: 287.628

Dirección entidad: Calle 72 N° 10-51 – Piso 6° - Bogotá.

Dirección apoderado: Avenida 6 A Bis N° 35 n-100 – oficina 212, Centro empresarial Chipichape, Cali.

Correo electrónico entidad: notificacioneslegales.co@chubb.com

Correo electrónico apoderado: gherrera@gha.com.co

Litisconsortes necesarios

Juan Alberto Polo Figueroa

Apoderado: Juan Alberto Polo Figueroa

Cédula de ciudadanía: 159.526

Tarjeta profesional: 3547 C.S.J.

Correo electrónico apoderado: jpolofigueroa@gmail.com

Diana Bovea Mendinueta

Apoderado: Diana Bovea Mendinueta

Cédula de ciudadanía: 57.438.474

Tarjeta profesional: 90.265 C.S.J.

Dirección apoderado:

Correo electrónico apoderado: dianaboveamendinueta@hotmail.com

Miguel Ángel Polo Campo

Curador Ad Littem: Juan Pablo Baena Vásquez

Cédula de ciudadanía: 1.032.369.977 de Bogotá D.C

Tarjeta profesional: 195.341

Dirección apoderado:

Correo electrónico apoderado: jbaenav@gmail.com

1.6. Ministerio Público. (02:48)

No comparece.

2- RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA.

- Al Doctor Cristian Alberto Meriño Segre, apoderado de la parte demandada – Cámara de Comercio de Santa Marta -, a quien se le reconoce personería para actuar según el poder conferido visible a folio 909 cuaderno 2 del expediente.
- Se deja constancia que los Doctores Juan Alberto Polo Figueroa con T.R 3547 C.S.J., y Diana Bovea Mendinueta con T.P: 90.265 C.S.J. ostentan la calidad de abogados y actúan en el presente proceso en nombre propio.
- Reconocer personería para actuar al Doctor Juan Pablo Baena Vásquez como Curador Ad-litem del señor Miguel Ángel Polo Campo, según lo dispuesto en el acta de posesión de 29 de agosto de 2019.
- Al Doctor Manuel Fernando Rodríguez Soto como apoderado sustituto y representante legal de la Sociedad Chubb Seguros S.A en los términos del poder allegado a la presente diligencia.

La presente decisión queda notificada por estrado y contra ella procede recurso de reposición de conformidad con el artículo 243 del CPACA. (Min 3:00)

Sin recursos.

3.- TRÁMITE DE LA DEMANDA Y SANEAMIENTO DEL PROCESO (Min: 03:00, -14:00)

Para efectos de realizar el saneamiento del proceso, la Magistrada sustanciadora indica trámite que se surtió en el presente medio de control, con el fin de verificar las etapas surtidas dentro del mismo, en virtud a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 180 del C.P.A.C.A. como a continuación se señala:

PRESENTACIÓN DEMANDA: 31 de julio de 2014 (f. 29).

INADMISIÓN: Mediante auto de 19 de agosto de 2014 este Despacho inadmitió la demanda, ordenando a la parte demandante corregir unos defectos anotados. (Fl. 629)

ADMISIÓN: Mediante auto de 23 de septiembre de 2014 se admitió la demanda. (Fl. 645-646)

PAGO GASTOS DEL PROCESO: 06 de octubre de 2014 (fl. 649-650).

NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO ADMISORIO: 22 de enero de 2015 (f. 651-673).

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA AUTO ADMISORIO: Por escrito de 27 de enero de 2015 la Cámara de Comercio interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, argumentando que la demanda no fue subsanada en término y debía rechazarse.

CONTESTACIÓN: Mediante apoderado judicial la Cámara de Comercio de Santa Marta contestó la demanda el 27 de marzo de 2015.

Mediante apoderado judicial el Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la demanda el 13 de abril de 2015.

AUTO RESUELVE REPOSICIÓN: Por auto de 08 de mayo de 2015 se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la cámara de comercio, señalando que la subsanación fue realizada en debida forma y se confirmó el auto admisorio de la demanda. (Fl. 683-685)

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: La Universidad del Magdalena contestó la demanda el 24 de junio de 2015.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA: Mediante escrito de 21 de julio de 2015 el apoderado judicial de la Cámara de Comercio de Santa Marta presentó solicitud de llamamiento en garantía a la empresa ACE Seguros S.A., hoy CHUBB Seguros S.A. (Fl. 744-745).

AUTO QUE RESUELVE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA: Por auto de 06 de noviembre de 2015 el Despacho accedió a la solicitud de llamamiento en garantía realizada por la Cámara de Comercio ordenando vincular al proceso a Ace Seguros S.A. (Fl. 769)

TRASLADO DE EXCEPCIONES: 02 de diciembre de 2016 (f. 773).

CONTESTACIÓN DEL LLAMADO EN GARANTÍA: Mediante apoderado judicial la sociedad ACE SEGUROS contestó la demanda y el llamamiento en garantía realizado por la Cámara de Comercio de Santa Marta. (Fl. 774-792).

TRASLADO DE EXCEPCIONES: El 16 de diciembre de 2015 se dio traslado de las excepciones propuestas por el llamado en garantía. (Fl. 832)

FIJACIÓN FECHA AUDIENCIA INICIAL: Mediante auto de 15 abril de 2016, se fijó fecha para la realización de la audiencia inicial para el 30 de junio de 2016 a las 10:00am. (f. 843).

AUTO REPROGRAMA FECHA AUDIENCIA: El 19 de mayo de 2016 se reprogramó la fecha de audiencia inicial para el 03 de noviembre de 2016 indicando que debía dársele prelación a las acciones constitucionales. (Fl. 845)

AUTO SUSPENDE AUDIENCIA: Por auto de 01 de noviembre de 2016 se suspendió la realización de la audiencia atendiendo el cambio de titular del Despacho y la reorganización del calendario. (Fl. 856).

AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA: Por auto de 26 de enero de 2017 se fijó fecha para celebrar audiencia inicial el 07 de marzo de 2017. (Fl. 859).

AUDIENCIA INICIAL: En audiencia inicial celebrada el 07 de marzo de 2017 se ordenó la vinculación de los señores Diana Bovea Mendinueta, Miguel Ángel Polo Campo y Juan Alberto Polo Figueroa quienes conformaban el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta. (Fl. 862-864)

NOTIFICACIÓN VINCULADOS: El 18 de mayo de 2017 se notificó personalmente de la demanda a los señores Diana Bovea Mendinueta y Juan Alberto Polo Figueroa. (Fl. 873-875).

CONSTANCIA SECRETARIAL: El 01 de julio de 2017 el Secretario General de esta Corporación dejó constancia que el señor Miguel Ángel Polo Campo se rehusó a comparecer al Tribunal para notificarse de la vinculación. (Fl. 875-2).

CONTESTACIÓN DEMANDA: Los árbitros vinculados Diana Bovea Mendinueta y Juan Alberto Polo Figueroa contestaron la demanda el 30 de junio de 2017. (Fl. 877-900).

TRASLADO DE EXCEPCIONES: El 09 de agosto de 2017 se corrió traslado a las excepciones propuestas por los demandados.

EMPLAZAMIENTO: Ante la no comparecencia del señor Miguel Ángel Polo Campo se procedió a emplazarlo el día 18 de octubre de 2018. (Fl. 954).

DESIGNACIÓN CURADOR: Debido a la no comparecencia de Miguel Polo Campo, mediante auto de 22 de enero de 2019 se designó como curador ad litem al abogado Efraín Emilio Labarcés Jiménez. (Fl. 970). Quien no aceptó la designación aduciendo tener más de 6 labores de curador lo que le impide desempeñar en debida forma la designación.

DESIGNA NUEVO CURADOR: Por auto de 06 de agosto de 2019 se designó como curador al abogado Juan Pablo Baena Vásquez. (Fl. 995). Quién tomó posesión el 29 de agosto de 2019. (Fl. 1005).

CONTESTACIÓN DEMANDA: El 26 de septiembre de 2019 el curador ad litem de Miguel Ángel Polo contestó la demanda. (Fl. 1006-1019)

TRASLADO DE EXCEPCIONES: 30 de octubre de 2019. (Fl. 1029)

FIJA FECHA AUDIENCIA INICIAL: Por auto de 19 de diciembre de 2019 se fijó fecha y hora para celebrar audiencia inicial el día 11 de febrero de 2020 a las 03:00 pm.

La Magistrada Sustanciadora, estima que dentro del proceso de la referencia no se han presentado irregularidades, ni nulidades de las que trata el artículo 133 del C.G.P., que puedan invalidar la actuación procesal.

Por lo anterior, se solicita a los apoderados su manifestación expresa sobre el pronunciamiento realizado por el Despacho.

Los apoderados no manifiestan que no tiene ninguna objeción.

Por lo anterior, se declara saneado el proceso hasta esta etapa en aplicación del numeral 4º del artículo 180 del C.P.A.C.A.

La presente decisión queda notificada por estrado y contra ella procede el recurso de reposición de conformidad con el artículo 242 del CPACA.

Sin recursos

4.- DECISIÓN DE LAS EXCEPCIONES. (Min: 03:22-03:55)

4.1. La Cámara de Comercio de Santa Marta propuso como excepciones las siguientes:

Inepta demanda o indebida escogencia de la acción
Cosa juzgada
Falta de legitimación en la causa por pasiva
Falta de competencia
Caducidad

Y como excepciones de fondo las siguientes:

Culpa exclusiva de la víctima
Hecho de un Tercero
Carencia de los elementos de la responsabilidad
Genérica

- Inepta demanda o indebida escogencia de la acción:

La Cámara de Comercio manifestó que los requisitos de la demanda no se encuentran presentes, porque persigue una restitución y no se presentó la actio in rem verso, pues es claro y a todas luces visible que la administración de justicia dio por culminado un conflicto que se suscitó entre dos partes, el cual ahora mal pretende revivir el demandante.

Así mismo manifiesta que la demanda es inepta porque a pesar de haberse ordenado su corrección, esta se hizo por fuera del término.

Decisión:

- Requisitos de la demanda en el C.P.A.C.A.

El art.162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica los requisitos de las demandas que se presenten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y señala:

"ARTÍCULO 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones. (...)

Advierte el Despacho que la excepción planteada no está llamada a prosperar, porque el objeto del presente proceso, se circunscribe a obtener el reconocimiento de perjuicios causados como consecuencia de la anulación del laudo arbitral por medio del cual se dirimió la controversia surgida entre la UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN – y la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, con ocasión del contrato estatal de obra N° 146 celebrado entre ellas el 30 de diciembre de 2005, y NO del reconocimiento de perjuicios ocasionados por la Universidad del Magdalena por incumplimiento del contrato.

Por ende, no es de recibo el argumento de la Cámara de Comercio de que el accionante debió direccionar la demanda bajo la figura del enriquecimiento sin causa, porque las pretensiones de resarcimiento efectuadas contra la Universidad del Magdalena con ocasión a la mayor permanencia de la obra y el detrimento económico imputable, a su juicio, a la Universidad, fueron debatidos en el laudo arbitral, tal como lo estipuló el contrato de obra N° 146 en su cláusula décima octava; el cual fue fallado a favor de la Unión Temporal Obresan.

Con relación a que la corrección de la demanda fue efectuada por fuera del término, se resalta que tal como se dispuso en el auto de 8 de mayo de 2015, el auto mediante el cual se inadmitió la demanda fue notificado por estado electrónico N° 026 del 21 de agosto de 2014, por lo que, los 3 días para su ejecutoria vencieron el 26 de agosto, de suerte que el término de 10 días para subsanar la demanda de la referencia cuenta a partir del 27 de agosto de 2014 hasta el 9 de septiembre de 2014. Como el escrito fue radicado en la Secretaría de la Corporación el 5 de septiembre de 2014, se tiene que la subsanación de la demanda se realizó dentro del término.

En consecuencia, se declara no probada la excepción de caducidad.

Cosa juzgada

Manifiesta la Cámara de Comercio de Santa Marta que lo pretendido por el demandante en la acción de referencia, es lo mismo que pretendió en el Tribunal de arbitramento. Sin embargo, modificó los hechos para camuflar unos a los que les había operado la cosa juzgada para revivir términos y poner en consideración del operador judicial el mismo conflicto, tal como se evidencia, de una simple comparación de las pretensiones, porque si bien es cierto se declaró la nulidad del laudo arbitral, el conflicto ya está definido.

Decisión:

Esta Excepción se declarará no probada por las razones que pasan a explicarse.

Respecto de la excepción denominada cosa juzgada propuesta por el apoderado judicial de la Cámara de Comercio, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con ponencia del Doctor William Hernández Gómez, en providencia de 17 de marzo de 2016, definió la cosa juzgada como la *"institución jurídico procesal que busca otorgar a las sentencias un carácter definitivo, inmutable y vinculante, lo que impide a los jueces decidir sobre una discusión que ya ha sido resuelta en sede judicial. Con lo anterior, se pretende dotar de seguridad jurídica al ordenamiento jurídico, así como a las partes (sentencias inter partes) o a la comunidad en general (fallos con efectos erga omnes). Ahora bien, en relación con los elementos para la configuración de la cosa juzgada el artículo 303 del Código General del Proceso determina que estos son: la identidad de objeto, de causa y de partes.*

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T218/12 señaló:

"Identidad de objeto, "es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente". Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), "es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito (sic) a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa". Identidad de partes, "es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica". Lo anterior significa que si no existe identidad de objeto, de causa – entendida como hecho jurídico – y de partes, no opera el fenómeno jurídico de la cosa juzgada y el juez, obviamente, sin contrariar el principio de non bis in ídem, podrá pronunciarse sobre un asunto puesto a su consideración."

En el presente caso, se evidencia que no se cumple con el tópico de la identidad de partes señalada por la jurisprudencia de las altas cortes, comoquiera que en esta contienda judicial la Cámara de Comercio y el Tribunal de Arbitramento fungen como demandados, rompiendo de esta forma con una eventual declaratoria de cosa juzgada.

De igual forma, tampoco existe identidad de objeto, en el entendido que en este caso las pretensiones versan sobre una presunta falla en el servicio por error judicial, del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta, al proferir un laudo arbitral por fuera del término establecido en la Ley, lo cual conllevó a la posterior anulación de dicho laudo por parte del Consejo de Estado, pudiendo generar unos perjuicios a la parte demandante.

En efecto, el objeto de la presente demanda, no guarda identidad fáctica con el proceso que se adelantó ante el Tribunal de Arbitramento como quiera que en ese momento se discutía unos perjuicios causados en el cumplimiento del contrato de obra N° 146 celebrado con la Universidad del Magdalena y no la responsabilidad del estado por error judicial contemplada en el artículo 140 del CPACA.

En virtud de lo anterior, se declarará no probada la excepción de cosa juzgada.

- Falta de legitimación en la causa por pasiva

La Cámara de Comercio de Santa Marta manifiesta que no hay lugar a establecer responsabilidad en su contra, toda vez que se ha confundido la función jurisdiccional que se le atribuye a los árbitros, con la función de apoyo y trámite que es netamente administrativa, es decir de apoyo y trámite.

El Ministerio de Justicia y del Derecho manifiesta que las funciones de vigilancia y control que ejerce sobre los centros de arbitraje, conciliación y amigable composición, están limitados a exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias, lo cual no le otorga facultades para intervenir dentro de los procesos arbitrales.

Decisión:

La Magistrada Ponente señala que esta excepción es un presupuesto que debe ser estudiado en el fondo del asunto con la sentencia de mérito, y en apoyo a su decisión señala lo siguiente:

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en reciente providencia de fecha 23 febrero de 2015, proferida en el expediente Radicado: 080012333000201300513 01(4982-2014), Consejera Ponente Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, señaló que la **falta de legitimación en la causa por activa y pasiva material**, no es una excepción que deba ser analizada y decidida al inicio del proceso sino en la sentencia que resuelva el mérito del asunto planteado.

En la citada providencia, se dijo:

"La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo – no es procesal –; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante. Lo anterior permite inferir, a contrario del Tribunal, que la ilegitimación en la causa – de hecho o material – no configura excepción de fondo.

De manera que la legitimación material en la causa deberá analizarse en la sentencia, con la finalidad de determinar si prosperan las pretensiones de la demanda o si por el contrario las mismas deben ser denegadas. En este sentido la legitimación en la causa es un presupuesto material para dictar sentencia favorable, el cual supone determinar si en realidad el demandado es quien está en el deber de proveer la satisfacción del derecho reclamado o si el actor es el titular del mismo. En caso de que tal situación no se demuestre, las pretensiones de la demandada deben negarse, no porque no exista el derecho, sino porque el demandante no estaba capacitado para reclamarlo o el demandado no estaba realmente obligado a su cumplimiento (...)" (Se subrayó).

Teniendo en cuenta lo manifestado por el Consejo de Estado, la Magistrada resuelve no acceder al estudio de dicha excepción en esta etapa procesal y se pospone el estudio para la sentencia.

- Falta de competencia

Manifiesta la Cámara de Comercio que la responsabilidad de las entidades privadas no es de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a no ser que se trate de una entidad privada que preste un servicio público. Sin embargo, para que la entidad privada sea susceptible de ser responsable bajo el régimen de responsabilidad del Estado, deberá haber una relación entre los hechos y la función pública que preste la entidad y, si bien es cierto, la Cámara de Comercio de Santa Marta presta servicios públicos, no es cierto que en este caso lo haya hecho, pues las funciones del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, nada tiene que ver con funciones públicas, por cuanto estas son de apoyo y trámite, en el sentido de organizar y dirigir el centro, más no tienen un carácter público sino por el contrario son funciones de resorte del derecho privado. Diferente sucede con la función de los árbitros que, si es una función pública o con la función del registro mercantil, pero para los hechos de la demanda no se ha realizado función pública alguna:

Decisión:

El artículo 116 de la Constitución Política consagra que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

La Ley 270 de 1996 - Ley Estatutaria de Administración de Justicia -, en su artículo 8 establece que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad.

Por su parte, el art.13 de la misma disposición, el cual se encuentra contenido en el Capítulo I denominado De la integración y competencia de la Rama Judicial, dispuso que también ejercerán funciones jurisdiccionales "(...) 3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley."

El artículo 74 de la normatividad en cita, en el Capítulo VI, "de la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales", estableció que las disposiciones de éste capítulo se aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la Rama Judicial, así como también a los particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función jurisdiccional, de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente Ley.

Por su parte, el artículo 140 del C.P.A.C.A., establece:

Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Expresión subrayada declarada Exequible por el cargo examinado, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2011

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.

De acuerdo con las normas citadas, es evidente que como el legislador revistió de función jurisdiccional a los particulares que transitoriamente administren justicia en sede arbitral, es factible que se pueda demandar mediante la acción de reparación directa los daños producidos por la acción u omisión de los mismos, lo que conlleva a la competencia de esta Corporación para pronunciarse sobre el caso en comento.

Ahora bien, los argumentos expuestos por la Cámara de Comercio referente a que en el caso concreto no ha efectuado ninguna función pública sino de apoyo y trámite, hacen parte de argumentos que conllevarían a la falta de legitimación en la causa por pasiva, que como se desarrolló en la excepción anterior, será resuelta al decidir de fondo.

En consecuencia, se declara no probada la excepción de falta de competencia.

- Caducidad

El apoderado judicial de la Cámara de Comercio propuso como excepción previa la de caducidad, y manifestó que el daño o perjuicio se le causó con ocasión a la expedición del laudo arbitral y/o de la ampliación del término de funcionamiento del Tribunal de Arbitramento, y siendo así, como el laudo arbitral se profirió el 22 de agosto de 2011, la demanda debía interponerse hasta el 22 de agosto de 2013, y como en el presente caso ésta se presentó el 31 de julio de 2014, habría operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Decisión:

Respecto de dicha excepción, propuesta por el apoderado de la Cámara de Comercio de Santa Marta el Despacho la declarará no probada con fundamento en las siguientes consideraciones:

El término de caducidad para el medio de control de reparación directa se encuentra contemplado en el artículo 164 del CPACA, que señala: *i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.*

La lectura del artículo citado, debe realizarse siempre atendiendo las particularidades de cada caso en concreto, para lo cual se debe tener especial observancia del hecho que generó el perjuicio al particular.

En ese sentido, este Despacho considera que las pretensiones indemnizatorias en el sub lite, tienen como génesis los perjuicios causados con ocasión a la anulación del Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta. Dicha anulación, fue declarada por el Consejo de Estado mediante providencia de 25 de abril de 2012, la cual cobró ejecutoria el 10 de mayo del mismo año, por tanto, el término para iniciar el conteo de la caducidad debe ser **a partir del día 11 de mayo de 2012**. En ese entendido, la caducidad del medio de control operaría a partir del 11 de mayo de 2014.

Es claro para el Despacho que los daños que alegan sufrir los demandantes se dio con la providencia proferida por el H. Consejo de Estado que anuló el laudo arbitral dictado por el Tribunal de Arbitramento, y es a partir de la ejecutoria anulación que deben iniciar a contarse los dos años para interponer la demanda de reparación directa por error judicial.

Sobre el particular el H. Consejo de Estado ha señalado en providencia de 24 de mayo de 2018, en proceso bajo radicado 73001-23-31-000-2004-01044-02(41722), lo siguiente:

"La ley consagra entonces un término de dos años, contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Ahora bien, en tratándose del cómputo de caducidad del término de acción de reparación directa, la jurisprudencia de la Sección ha establecido que, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios solo surge a partir de cuando estos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

Así pues, en estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del "acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa", sino a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad⁹ -cuando esta última no coincide con la causación de aquel, es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la imposibilidad de conocerlo¹⁰-, o cuando aquel se entiende consolidado -en los eventos en que el daño se prolonga en el tiempo¹¹-, circunstancias que se analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

Sobre el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, la Sala, en reiterada jurisprudencia¹², se ha pronunciado en los siguientes términos:

Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no omita por razones formales la reparación de los daños que la merecen¹³.

Debe agregarse a lo anterior que, el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieron carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia del 18 de octubre de 2000:

Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieron carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando éste se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos¹⁴."

En el presente asunto, la solicitud de conciliación prejudicial, fue interpuesta ante la Procuraduría 155 Judicial II para Asunto Administrativos el día 06 de mayo de 2014, esto es faltando cinco (5) días para que operara caducidad, suspendiendo el término de la misma, hasta tanto no se cumplieran los requisitos dispuestos en el artículo 20 y subsiguientes de la Ley 640 de 2001.

El día 31 de julio de 2014, el Agente del Ministerio Público, expidió constancia de no conciliación y ese mismo día fue presentada la demanda ante la Oficina de Apoyo Judicial del Circuito de Santa Marta, encontrándose dentro del término legal para hacerlo.

Por las anteriores consideraciones, este Despacho declarará no probada la excepción de caducidad propuesta por los apoderados de la entidad demandada.

La presente decisión queda notificada en estrados de conformidad con el artículo 202 del C.P.A.C.A., y contra la misma procede el recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 180 del CPACA.

Frente a las excepciones de fondo denominadas Culpa exclusiva de la víctima, Hecho de un Tercero, Carencia de los elementos de la responsabilidad y Genérica el Despacho advierte que son argumentos de defensa de la entidad demandada que serán analizadas al momento de resolver de fondo la presente Litis.

De igual forma, no se advierten en esta etapa hechos probados que configuren excepciones previas y que deban ser declarados de oficio en la presente diligencia.

La presente decisión queda notificada por estrado y contra ella procede el recurso de reposición de conformidad con el artículo 242 del CPACA.

4.2. EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO PROPUSO COMO EXCEPCIÓN LA DE:

- Falta de legitimación en la causa por pasiva

Como esta excepción también fue propuesta por el apoderado judicial de la Cámara de Comercio el Despacho se remite a lo decidido en el numeral anterior con los mismos argumentos en que se decidió posponer su estudio para la decisión que ponga fin al proceso.

La presente decisión queda notificada por estrado y contra ella procede el recurso de reposición de conformidad con el artículo 242 del CPACA.

4.3. LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA PROPUSO COMO EXCEPCIÓN LA DE:

- Caducidad

El apoderado judicial de la Universidad del Magdalena, también propuso como excepción la de caducidad y manifestó que la demanda fue interpuesta por fuera del término legal como quiera que la solicitud de conciliación no se realizó en debida forma el 6 de mayo de 2014 como lo señaló el demandante, sino que fue el 8 de mayo del mismo año, que fue la fecha en la que le allegaron a la Universidad del Magdalena las copias de la solicitud de conciliación extrajudicial realizada ante la procuraduría 155 judicial II para asuntos administrativos.

Así las cosas, la solicitud de conciliación debió haber sido rechazada por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Decisión

Como esta excepción también fue propuesta por el apoderado judicial de la Cámara de Comercio y fue declarada no probada en el acápite anterior, el Despacho se remite a lo decidido en precedencia frente a la caducidad del medio de control.

La presente decisión queda notificada en estrados de conformidad con el artículo 202 del C.P.A.C.A., y contra la misma procede el recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 180 del CPACA.

4.4. Ace Seguros S.A., Hoy Chubb Seguros (Llamado en garantía), propuso como excepciones las siguientes:

Previas

- Caducidad

De fondo

- Culpa exclusiva de los demandantes
- No se configuran los elementos del error judicial
- Inexistencia de responsabilidad de la cámara de comercio de Santa Marta
- La cámara de comercio no incurrió en falla alguna en la elaboración de la lista de árbitros adscritos a esa entidad.
- Ruptura de nexo causal
- Causa extraña y hecho de un tercero
- La cámara de comercio no está obligada a responder
- No se dan los presupuestos de la responsabilidad endilgada
- Carencia de prueba del supuesto perjuicio
- Imposibilidad de reconocer perjuicios morales en favor de una persona jurídica
- Los demandantes pretenden una doble indemnización por un mismo hecho.
- Concurrencia de culpas
- Innominada
- Inexistencia de cobertura
- Marco de los amparos otorgados, límites máximos de responsabilidad, condiciones del seguro, exclusiones pactadas y en general alcance contractual de las obligaciones del asegurador.
- Prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro
- Las exclusiones de amparo
- Genérica

Caducidad

El apoderado judicial de la aseguradora ACE Aseguradora S.A., Hoy Chubb S.A., Seguros propuso como excepción la de caducidad y señaló que el término de la misma debió computarse a partir de la expedición del laudo arbitral por fuera del término legal, dado que fue esta actuación la configurativa del daño. En ese sentido, como el laudo fue proferido el 11 de agosto de 2011, la caducidad se configuró el 11 de agosto de 2013.

Señaló que no puede aceptarse que se inicie el conteo de la caducidad de la acción a partir de la providencia que anuló el laudo, porque siendo así, se estaría frente a

la engañosa afirmación que la providencia del Consejo de Estado fue el hecho que provocó el daño.

Decisión

Como esta excepción también fue propuesta por el apoderado judicial de la Cámara de Comercio y fue declarada no probada en el acápite anterior, el Despacho se remite a lo decidido en precedencia frente a la caducidad del medio de control.

La presente decisión queda notificada en estrados de conformidad con el artículo 202 del C.P.A.C.A., y contra la misma procede el recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 180 del CPACA.

Frente a las excepciones de fondo

- Culpa exclusiva de los demandantes
- No se configuran los elementos del error judicial
- Inexistencia de responsabilidad de la cámara de comercio de Santa Marta
- La cámara de comercio no incurrió en falla alguna en la elaboración de la lista de árbitros adscritos a esa entidad.
- Ruptura de nexo causal
- Causa extraña y hecho de un tercero
- La cámara de comercio no está obligada a responder
- No se dan los presupuestos de la responsabilidad endilgada
- Carencia de prueba del supuesto perjuicio
- Imposibilidad de reconocer perjuicios morales en favor de una persona jurídica
- Los demandantes pretenden una doble indemnización por un mismo hecho.
- Concurrencia de culpas
- Innominada
- Inexistencia de cobertura
- Marco de los amparos otorgados, límites máximos de responsabilidad, condiciones del seguro, exclusiones pactadas y en general alcance contractual de las obligaciones del asegurador.
- Prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro
- Las exclusiones de amparo
- Genérica

Decisión:

Frente a excepciones de fondo el Despacho advierte que son argumentos de defensa de la entidad demandada que serán analizadas al momento de resolver de fondo la presente Litis.

De igual forma, el Despacho no advierte hechos probados que configuren excepciones previas y que deban ser declarados de oficio en la presente diligencia.

4.5. Juan Alberto Polo Figueroa y Diana Bovea Mendinueta propusieron como excepciones las siguientes:

- **Caducidad**
- Inexistencia de los presupuestos del error jurisdiccional
- Inexistencia de Dolo o Culpa Grave
- Inexistencia de perjuicios
- **Improcedencia de la acción Incoada por existencia de otros medios de control**

Caducidad

Los señores Juan Alberto Polo Figueroa y Diana Bovea Mendinueta propusieron excepción de caducidad y manifestaron que el término de dos años que consagra el artículo 164 del CPACA debe iniciar el conteo a partir del auto que ordenó suspender términos en el proceso seguido en el Tribunal de Arbitramento el día 13 de abril de 2011. En ese sentido, como la demanda fue presentada el 31 de julio de 2014 operó la caducidad.

Como esta excepción también fue propuesta por el apoderado judicial de la Cámara de Comercio y fue declarada no probada en el acápite anterior, el Despacho se remite a lo decidido en precedencia frente a la caducidad del medio de control. En consecuencia, se declara no probada la excepción de caducidad.

En lo referente a la improcedencia de la acción por existencia de otros medios de control, el Despacho se remite a los argumentos expuestos al momento de decidir la excepción de inepta demanda o indebida escogencia de la acción propuesta por el apoderado judicial de la cámara de comercio, reiterando que en este caso los accionantes demandan los perjuicios presuntamente causados con ocasión a la anulación del laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento de forma extemporánea, bajo el título de imputación error judicial, y no frente al litigio contractual surgido entre los actores y la Universidad del Magdalena.

En consecuencia, se declara no probada la excepción de improcedencia de la acción por existencia de otros medios de control.

La presente decisión queda notificada en estrados de conformidad con el artículo 202 del C.P.A.C.A., y contra la misma procede el recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 180 del CPACA.

Sin recursos

En lo referente a las excepciones Inexistencia de los presupuestos del error jurisdiccional, Inexistencia de Dolo o Culpa Grave e Inexistencia de perjuicios el Despacho advierte que son argumentos de defensa de los demandados que serán analizadas al momento de resolver de fondo la presente Litis.

De igual forma, el Despacho no advierte hechos probados que configuren excepciones previas y que deban ser declarados de oficio en la presente diligencia.

4.6. El curador ad litem del señor Miguel Ángel Polo Campo propuso como excepciones las siguientes:

Improcedencia de la acción Incoada por existencia de otros medios de control
Inexistencia de los presupuestos del error jurisdiccional
Inexistencia de Dolo o Culpa Grave
Inexistencia de perjuicios

En lo referente a la improcedencia de la acción por existencia de otros medios de control, el Despacho se remite a los argumentos expuestos al momento de decidir la excepción de inepta demanda o indebida escogencia de la acción propuesta por el apoderado judicial de la cámara de comercio, reiterando que en este caso los accionantes demandan los perjuicios presuntamente causados con ocasión a la anulación del laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento de forma extemporánea, bajo el título de imputación error judicial, y no frente al litigio contractual surgido entre los actores y la Universidad del Magdalena.

En consecuencia, se declara no probada la excepción de improcedencia de la acción por existencia de otros medios de control.

La presente decisión queda notificada en estrados de conformidad con el artículo 202 del C.P.A.C.A., y contra la misma procede el recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 180 del CPACA.

Sin recursos.

Frente a las demás excepciones Inexistencia de los presupuestos del error jurisdiccional, Inexistencia de Dolo o Culpa Grave e Inexistencia de perjuicios el Despacho advierte que son argumentos de defensa de los demandados que serán analizadas al momento de resolver de fondo la presente Litis.

De igual forma, el Despacho no advierte hechos probados que configuren excepciones previas y que deban ser declarados de oficio en la presente diligencia.

La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella procede recurso de reposición.

El apoderado de la parte DEMANDADA – CAMARA DE COMERCIO interpone recurso de apelación CONTRA LA DECISIÓN DE DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA Y DE CADUCIDAD.

El Doctor Juan Alberto Polo Figueroa interpone recurso de apelación contra la decisión de declarar no probada la excepción de caducidad.

La apoderada judicial de la Universidad del Magdalena interpone recurso de apelación contra la decisión de declarar no probada la excepción de caducidad.

La Doctora Diana Bovea Mendinueta interpone recurso de apelación y solicita que la caducidad sea resuelta en el fallo que ponga fin al proceso y señala que se debe iniciar a contar la caducidad desde el auto que amplió el término de funcionamiento del Tribunal de Arbitramento.

Se les da traslado a las partes del recurso interpuesto por la Cámara de Comercio, la Universidad del Magdalena, Chubb Seguros S.A., y los doctores Juan Alberto Polo Figueroa y Diana Bovea Mendinueta.

La parte demandante se opone a la concesión del recurso.

Las partes demandadas manifiestan coadyuvar el recurso de apelación y solicitar que la decisión de caducidad sea pospuesta para el fallo.

Una vez escuchadas las partes la Sala **RESUELVE**

PRIMERO: CONCEDER en el efecto suspensivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 del C.P.A.C.A., el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada – CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA, la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, CHUBB SEGUROS S.A., JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA Y DIANA BOVEA MENDINUETA, de declarar no probada la excepción de caducidad.

Así, como el recurso de apelación interpuesto por la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA contra la decisión de declarar no probada la excepción de inepta demanda por subsanar por fuera de término de la inadmisión de la demanda.

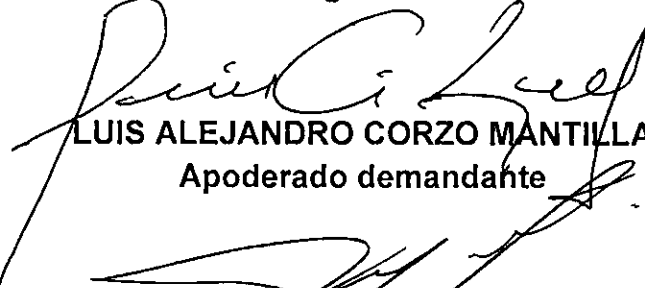
SEGUNDO: Por Secretaría **REMITIR** de forma inmediata el expediente a la Sección Tercera del H. Consejo de Estado para lo de su competencia.

La presente decisión queda notificada en estrados.

Constancia de grabación

Se verifica que ha quedado debidamente grabado el audio y que hará parte de la presente acta. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, siendo las 04:58 p.m., se da por terminada y se firma por quienes intervinieron (Min 20: 24)


MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Magistrada


LUIS ALEJANDRO CORZO MANTILLA
Apoderado demandante

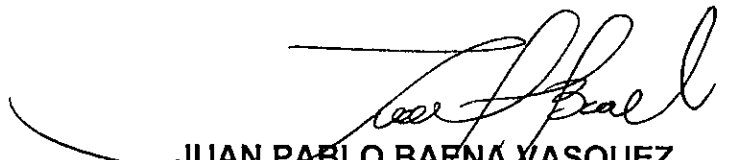

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA
Vinculado


MANUEL FERNANDO RODRÍGUEZ SOTO
Apoderado de Chubb Seguros S.A.

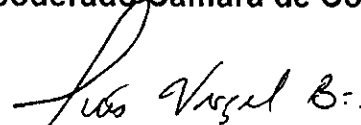

LIGIA PATRICIA AGUIRRE CUBIDES
Apoderado Min Justicia y del Derecho


CLAUDIA KATIME FONTALVO (Claudia Katime Fontalvo)
Apoderada UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

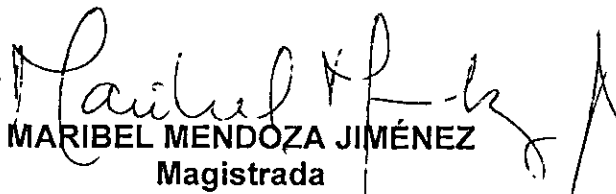

DIANA BOVEA MENDIUETA
Vinculada


JUAN PABLO BAENA VÁSQUEZ
Curador Ad Litem Miguel Ángel Polo Campo


CRISTIAN MERIÑO SEGRERA
Apoderado Cámara de Comercio


LUIS ALEJANDRO VERGEL BRUGÉS
Profesional Universitario Grado 16

Se deja constancia que según se puede constatar en el audio el doctor Juan Pablo Baena Vásquez coadyuvó el recurso de apelación contra la decisión de declarar no probada la excepción de caducidad interpuesto por los apoderados judiciales de la Universidad del Magdalena, Chubb Seguros S.A., Juan Polo Figueroa y Diana Bovea Mendinueta. En consecuencia, también se concede el recurso en virtud de la coadyuvancia presentada por dicha parte procesal, tal como se concedió en el curso de la diligencia.


MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Magistrada

144

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA

E.

S.

D.

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA – OBRESAN.

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA – CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN – UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

LLAMADA EN GARANTÍA: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A

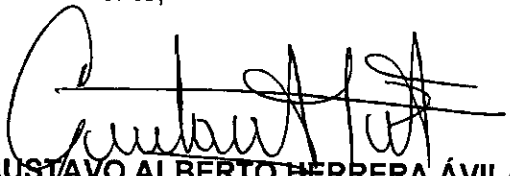
RADICADO: 47-001-2333-003-2014-00241-00

ASUNTO: SUSTITUCIÓN DE PODER Y DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL PARA ACTUAR DENTRO DE LA AUDIENCIA DEL ARTÍCULO 180 DEL CPACA.

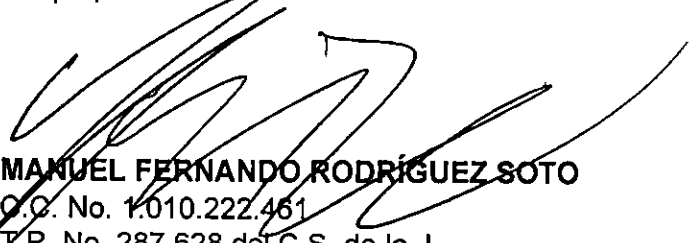
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Bogotá, con oficina en la Carrera 11 A No. 94 A – 56 OF - 402, identificado con la C.C. No. 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado en ejercicio portador de la T.P. No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el presente escrito actuando en mi calidad de apoderado general de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A**, con expresas facultades para ejercer la representación legal de la Compañía en todo tipo de trámites judiciales, administrativos y extrajudiciales, incluida la audiencia inicial de un proceso judicial, tal y como se acredita por medio del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá que se anexa a este escrito, comedidamente me dirijo a su despacho con el fin de manifestar que, con base en el artículo 75 del Código General del Proceso, **REASUMO** y en el mismo acto **SUSTITUYO** el poder a mi conferido, y a su vez, **DELEGO** la representación legal de esta Compañía al doctor **MANUEL FERNANDO RODRÍGUEZ SOTO**, identificado con la cédula de ciudadanía 1.010.222.461, abogado en ejercicio y portador de la tarjeta profesional No. 287.628, lo cual incluye la facultad de ejercer la representación legal de la Compañía en todo tipo de trámites judiciales, administrativos y extrajudiciales, incluyendo audiencias de conciliación judiciales, y la absolución de interrogatorio de parte, para que, en virtud de dicha facultad, obre en nombre y representación de la Compañía de Seguros en la diligencia indicada en la referencia.

Para el pleno cumplimiento de la presente sustitución y delegación, el doctor **RODRÍGUEZ SOTO**, queda investido para recibir, desistir, conciliar, transigir, comprometer, sustituir, rendir interrogatorio de parte, reasumir y en general, para realizar todas las acciones necesarias e indispensables para el buen éxito del mandato a su cargo.

Cordialmente,


GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

Acepto,


MANUEL FERNANDO RODRÍGUEZ SOTO
C.C. No. 1.010.222.461
T.P. No. 287.628 del C.S. de la J

NOTARIAS 12
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Del Circuito de Bogotá

HERRERA AVILA GUSTAVO ALBERTO
C.C. 193951114
y T.E. 39116

... dijo que reconoce como suyo el documento y la firma que en el aparece, que es de su puño y letra. Para constancia se firma.

www.notarisnlinea.com
Bogotá D.C. 14/02/2020 08:05:48 a.m.

MAURICIO E. GARCIA HERREROS CASTANEDA
NOTARIO 12 DE BOGOTÁ D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA

EX4180P6121GB0C8

NOTARIA 12
Circuito de Bogotá D.C.
MAURICIO GARCIA - HERREROS CASTANEDA
NOTARIO TITULAR

Gustavo Herrera



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A1995475456597

7 de octubre de 2019 Hora 18:43:12

AA19954754 Página: 1 de 6
* * * * *

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadosselectronicos/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O
INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
N.I.T. : 860026518-6
Domicilio : Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Matrícula No: 00007164 del 21 de marzo de 1972

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 29 de marzo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: \$ 988,286,250,414
Tamaño Empresa: Grande

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: CR 7 NO. 71 21 TO B PISO 7
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: NOTIFICACIONESLEGALES.CO@CHUBB.COM

Dirección Comercial: CR 7 NO. 71 21 TO B PISO 7
Municipio: Bogotá D.C.
Email Comercial: NOTIFICACIONESLEGALES.CO@CHUBB.COM

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 0809 Notaría 10 de Bogotá del 11 de marzo de 1.988 inscrita el 14 de marzo de 1.988 bajo el No.231.117 del libro IX, la sociedad cambio el nombre de: "SEGUROS COLINA S.A. Por el de: CIGNA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 000809 de Notaría 10 de Bogotá, D.C. Del 11 de marzo de 1988, inscrita el 17 de marzo de 1988 bajo el No. 00217391 del libro 09, la sociedad cambio el nombre por: CIGNA SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 003583 de Notaría 18 de Santa Fe de Bogotá, D.C. Del 07 de septiembre de 1999, inscrita el 14 de septiembre de 1999 bajo el No. 00696123 del libro 09, la sociedad cambio el nombre de: CIGNA SEGUROS DE COLOMBIA S.A., por el de: ACE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1482 de la Notaría 28 de Bogotá D.C. Del 21 de octubre de 2016, inscrita el 1 de noviembre de 2016 bajo el número 02154169 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: ACE SEGUROS S.A., por el de: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

Que por E.P. No. 1071 de la Notaría 10 de Bogotá del 4 de abril de 1988, inscrita el 15 de abril de 1988 bajo el No. 233521 del libro IX, la sociedad se fusiono, absorbiendo a la compañía la CONTINENTAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1498 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 25 de octubre de 2016, inscrita el 1 de noviembre de 2016 bajo el número 02154138 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. La cual se disuelve sin liquidarse, transfiriendo en bloque la totalidad de sus activos y pasivos.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2.844	26-V- 1.992	18 STAFE BTA	27-V- 1.992 NO.366.564
2.142	16- V-1.995	18 STAFE BTA	24- V-1.995 NO.493.932
2.847	19-VI-1.996	18 STAFE BTA.	24-VI-1.996 NO.542.979

CERTIFICA:

Reformas:

Documento	No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0001797	1999/05/19	Notaría 18	1999/06/01	00682571	
0003583	1999/09/07	Notaría 18	1999/09/14	00696123	
0008226	2000/06/27	Notaría 18	2000/06/29	00735121	
0005349	2000/10/06	Notaría 18	2000/10/20	00749625	
0001104	2001/08/21	Notaría 16	2001/08/30	00791851	
0003874	2002/05/03	Notaría 29	2002/05/16	00827149	



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A1995475456597

7 de octubre de 2019

Hora 18:43:12

AA19954754

Página: 2 de 6

* * * * *

0010754 2002/10/09 Notaría 29 2002/10/25 00850293
 0001182 2006/05/03 Notaría 11 2006/05/09 01054022
 1010 2009/04/22 Notaría 28 2009/04/29 01293353
 122 2010/01/22 Notaría 16 2010/01/25 01356112
 660 2010/03/12 Notaría 16 2010/03/15 01368649
 642 2014/04/15 Notaría 28 2014/04/24 01828907
 1034 2014/06/18 Notaría 28 2014/07/07 01849532
 001634 2015/12/22 Notaría 28 2016/01/13 02052237
 1482 2016/10/21 Notaría 28 2016/11/01 02154169
 1498 2016/10/25 Notaría 28 2016/11/01 02154138

CERTIFICA:

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el
 8 de octubre de 2069.

CERTIFICA:

Estatutos ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARÍA	INSCRIPCIÓN
5100	8- X-1.969	3 Bogotá	10-IX-1.969 No. 26745
1497	16-VIII-1974	11 Bogotá	16-IX-1.974 No. 20935
3933	19-XI -1.976	10 Bogotá	7-XII-1.976 No. 41326
964	9-III-1.982	7 Bogotá	4-VI -1.982 No.116768
4131	1-XII-1.987	10 Bogotá	28-XII-1.987 No.225595
809	11-III-1.988	10 Bogotá	14-III-1.988 No.231117
1067	8-VII-1.988	28 Bogotá	15-VII-1.988 No.240759
2007	7-XII-1.988	28 Bogotá	13-XII-1.988 No.252457
5128	10- XI-1.989	18 Bogotá	21- XI-1.989 No.280317
1740	20-IV- 1.990	18 Bogotá	8-IV- 1.990 No.293613
2010	7- V- 1.990	18 Bogotá	8-IV- 1.990 No.293613
3779	19- VI-1.991	18 Bogotá	27-VI -1.991 No.330796
2844	26- V -1.992	18 STAFE BTA	27-V -1.992 No.366564

CERTIFICA:

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto principal la realización de operaciones de seguro, bajo las modalidades y ramos facultados expresamente por la superintendencia bancaria y aquellas previstas en la ley con carácter especial. Así mismo, podrá efectuar operaciones de reaseguro en los términos que establezcan las disposiciones legales sobre el particular, o las de cualquier otro país donde establezca sucursales o agencias. En desarrollo de su objeto principal, la sociedad podrá ejecutar toda clase de negocios afines al de seguro que

la ley colombiana autorice a las compañías de seguros generales o comerciales, sea que estos negocios se desarrollen en el país o en el exterior y hacer las inversiones en bienes raíces o muebles legalmente permitidas, pudiendo participar en otras sociedades de cualquier tipo y cualquiera que sea su objeto, ya sean constituidas o en el acto de su constitución. Además, la sociedad podrá dar y recibir créditos, recibiendo u otorgando garantías reales y personajes, adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, gravarlos a cualquier título y cambiarles su forma, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones y, en consecuencia, aceptar, girar, descontar, adquirir, endosar, garantizar, protestar, dar en garantía toda clase de títulos valores, así como para realizar operaciones de libranza, y en general, ejecutar o celebrar toda clase de actos lícitos que tiendan directamente a la realización de su objeto social principal y las que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad.

CERTIFICA:

Actividad Principal:
6511 (Seguros Generales)

CERTIFICA:

Capital:

	** Capital Autorizado **
Valor	: \$0.00
No. de acciones	: 0.00
Valor nominal	: \$0.00

	** Capital Suscrito **
Valor	: \$0.00
No. de acciones	: 0.00
Valor nominal	: \$0.00

	** Capital Pagado **
Valor	: \$0.00
No. de acciones	: 0.00
Valor nominal	: \$0.00

CERTIFICA:

Aclaración Capital

	** Capital Autorizado **
Valor	: \$48,803,202,304.00
No. De acciones	: 1,449,809,040.00
Valor nominal	: \$33.6618140441447

	** Capital Suscrito **
Valor	: \$48,803,202,304.00
No. De acciones	: 1,449,809,040.00
Valor nominal	: \$33.6618140441447



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A1995475456597

7 de octubre de 2019 Hora 18:43:12

AA19954754

Página: 3 de 6

* * * * *

**** Capital Pagado ****

Valor : \$48,803,202,304.00
No. De acciones : 1,449,809,040.00
Valor nominal : \$33.6618140441447

CERTIFICA:

Que mediante Oficio No. 2436 del 20 de agosto de 2019, inscrito el 30 de Agosto de 2019 bajo el No. 00179553 del libro VIII, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, comunicó que en el Proceso Verbal (Responsabilidad Civil Extracontractual) No. 680013103004201900196-00 de Aminta Gaona De Prada, Eliecer Gaona Martínez y Eduardo Gaona Martínez, contra: AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A. y CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

CERTIFICA:

**** Junta Directiva: Principal (es) ****

Que por Acta no. 89 de Asamblea de Accionistas del 29 de marzo de 2019, inscrita el 17 de mayo de 2019 bajo el número 02467078 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
PRIMER RENGLON	
OBREGON TRILLOS MANUEL FRANCISCO	C.C. 000000079151183
SEGUNDO RENGLON	
AFANADOR GARZON OSCAR LUIS	C.C. 000000019490945
TERCER RENGLON	
MONTENEGRO RAMIREZ ALVARO JOAQUIN	C.C. 000000079485188
CUARTO RENGLON	
GUNN MARCOS ANDRES	P.P. 000000AAB744127
QUINTO RENGLON	
SARNIGUET KUZMANIC VIVIANNE	P.P. 000000P08841264

**** Junta Directiva: Suplente (s) ****

Que por Acta no. 89 de Asamblea de Accionistas del 29 de marzo de 2019, inscrita el 17 de mayo de 2019 bajo el número 02467078 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
PRIMER RENGLON	
PAZMINO CABRERA XAVIER ANTONIO	P.P. 000000908889264
SEGUNDO RENGLON	
GARCIA MONCADA GLORIA STELLA	C.C. 000000039782465
TERCER RENGLON	
SALCEDO ROBERTO	P.P. 000000488390096
CUARTO RENGLON	

CHAVES LOPEZ JAIME
QUINTO RENGLON
SEVILLA MUÑOZ FABRICIO

C.C. 000000079693817

P.P. 000001707261366

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1442 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 3 de noviembre de 2015, inscrita el 2 de diciembre de 2015 bajo el No. 00032689 del libro V, compareció Oscar Javier Ruiz Mateus identificado con cédula de ciudadanía No. 79.341.937 de Bogotá D.C., en su calidad de representante legal de la sociedad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general amplio y suficiente al doctor Jaime Rodrigo Camacho Melo, Varón colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.650.508 expedida en Bogotá y con la tarjeta profesional de abogado número 75.792 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura para que represente legal, jurídicamente y judicialmente a ACE SEGUROS S.A., en todos los asuntos de carácter administrativo, judicial, extrajudicial y arbitral, que conciernan a ACE SEGUROS S.A., y para que lleve a cabo los siguientes actos, en cualquier orden y sin consideración a su cuantía y calidad.

1. representación: para que represente a ACE SEGUROS S.A., ante cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, de carácter nacional o internacional y ante cualquiera juzgado, despacho judicial, cuerpo colegiado o tribunal, asamblea, junta, reunión, sociedad, consorcio, corporación, entidad, patrimonio autónomo, establecimiento, oficina, dirección, sección, que pertenezcan o no, o que estén vinculados o adscritos al estado o a la nación, a los departamentos, distritos, municipios, ministerios, departamentos administrativos, empresas industriales y comerciales del estado, establecimientos públicos, sociedad de economía mixta, Notarías y en general a toda la rama ejecutiva o administrativa, judicial o jurisdiccional y legislativa del poder público del estado, en cualquier acto, petición, actuación, diligencia, trámite o proceso en cualquier calidad. El apoderado podrá en representación de ACE SEGUROS S.A., absolver interrogatorios de parte, declarar y confesar.

2. Tribunal de arbitramento: Para que someta a la decisión de árbitros conforme a la ley y normas relacionadas, las controversias susceptibles de transacción relativas a los derechos y obligaciones de ACE SEGUROS S.A. Y para que represente a la mencionada aseguradora donde sea necesario en el trámite de procesos arbitrales.

3. Apoderado judicial: Para que represente a ACE SEGUROS S.A. Ante cualquier autoridad jurisdiccional o judicial en toda clase de procesos, juicios, trámites, diligencias, como demandante, demandado, llamado en garantía u otra calidad, sean civiles, comerciales, laborales, contenciosas administrativas, arbitrales y demás jurisdicciones que existan actualmente o puedan existir, teniendo las facultades que le confiere la ley y este mandato en general, más las de notificarse personalmente de toda providencia, contestar demandas y llamamientos en garantía, presentar e interponer recursos, promover incidentes, recibir, transigir, novar, conciliar, desistir y renunciar, sustituir total o parcialmente y reasumir, y las demás que sean necesarias para que nunca quede sin representación ACE SEGUROS S.A., judicial o extrajudicialmente ante autoridades judiciales, arbitrales o administrativas.

4. Conciliar y transigir: Para que concilie total o (sic) procesal, judicial o extrajudicialmente, cualquier tipo de (sic)



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A1995475456597

7 de octubre de 2019

Hora 18:43:12

AA19954754

Página: 4 de 6

* * * * *

negocios, ante juez, magistrado, arbitro, notario o conciliador (sic) general que esté adscrito o haga parte o no de cualquier (sic) entidad, fundación, asociación, consultorio jurídico, centro (sic) conciliación, centro de arbitraje, etc.; para que transija, (sic) arregle negocios, pleitos, procesos o trámites y diferencias (sic) ocurran respecto de los actos y contratos, derechos y obligaciones de ACE SEGUROS S.A. El apoderado en el evento de conciliación podrá presentar al conciliador, o a quien haga sus veces, todas las pruebas, documentos y excusas necesarios o a que haya lugar para que se pueda celebrar la respectiva audiencia. 5. Sustitución y revocación: Para que sustituya y reasuma total o parcialmente el presente poder y revoque sustituciones. 6. General: En general para que asuma la personería de ACE SEGUROS S.A., cuando lo estime conveniente y necesario, de tal modo que en ningún caso quede sin representación en sus negocios. Segundo: revocabilidad: ACE SEGUROS S.A., se reserva expresamente la facultad de revocar total o parcialmente el presente mandato, en cualquier momento y por cualquier razón. Para ello bastará que ACE SEGUROS S.A. Eleve a escritura pública la revocación y solicitud al señor notario para que este ordene, a quien corresponda, hacer la respectiva nota de revocación o cancelación sobre el texto de la presente escritura pública que contiene al presente poder general. Tercero: Vigencia: El presente poder tendrá vigencia indefinida a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura pública.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1599 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 24 de noviembre de 2016, inscrita el 6 de diciembre de 2016 bajo los No. 00036435 y 00036439 del libro V, compareció Jaime Chaves Lopez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.693.817 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de representante legal de la sociedad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente, a favor de Carlos Humberto Carvajal Pabon, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.354.035 y tarjeta profesional número 33041 del Consejo Superior de la Judicatura y a ~~Gustavo Alberto Herrera Avila~~, identificado con cédula de ciudadanía número 19.395.114 y con tarjeta profesional número 39116 del Consejo Superior de la Judicatura (los apoderados), para que en nombre y representación de la sociedad, realice los siguientes actos: Comparecer en juicio y representar a la sociedad en toda clase de asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos, teniendo todas aquellas funciones y facultades para ejercer dicha representación. Los apoderados en desarrollo de la representación legal de la sociedad para asuntos de índole judicial o administrativa, tendrán la facultad de imponerse de toda clase de notificaciones legales, confesar, interponer y sustentar recursos, contestar demandas, demandar y contra demandar, pedir y allegar pruebas,

intervenir en todas las etapas, instancias e incidentes de los procesos o actuaciones judiciales o administrativas, rendir informes, absolver interrogatorios en diligencia de confesión judicial y extrajudicial, desistir, conciliar, transigir, recibir, conferir poderes y revocarlos y en general para que asuma la personería y representación de la sociedad CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. En todos aquellos asuntos judiciales o administrativos que estime necesario y conveniente a los intereses de esta sociedad, de manera tan amplia que está ningún caso quede sin representación en dicha clase de asuntos.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1060 de la Notaría 28 de Bogotá, del 02 de octubre de 2018, inscrito el 12 de octubre de 2018 bajo el número 00040208 del libro V, Manuel Francisco Obregón Trillos identificado con cédula de ciudadanía No. 79.151.183 de Bogotá en su calidad de representante legal de la sociedad de la referencia, por medio del presente instrumento confiere poder especial, amplio y suficiente a favor de Olivia Stella Viveros Arcila identificada con cédula de ciudadanía No. 29.434.260 y/o María Del Mar García de Brigard, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.882.565 y/o Gloria Stella García Moncada, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.782.465 y/o Ivonne Orozco Vasconsellos identificada con cédula de ciudadanía No. 49.786.217 y/o Carolina Isabel Rodríguez Acevedo, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.417.444 y/o Daniel Guillermo García Escobar identificado con cédula de ciudadanía No. 16.741.658 (los apoderados) para que actúen individual o conjuntamente en nombre y representación de la sociedad para I) Firmar pólizas de seguros en nombre de la sociedad. II) Firmar certificaciones derivadas de las pólizas de seguros para los ramos autorizados. Los apoderados estarán facultados para negociar, suscribir, actualizar certificaciones derivadas de las mismas. III) Los apoderados tienen la capacidad para sustituir y reasumir este poder.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1585 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 22 de noviembre de 2016, inscrita el 29 de noviembre de 2016 bajo los No. 00036239, 00036240, 00036241, 00036242, 00036243 y 00036244 del libro V, compareció María Del Mar García de Brigard identificada con cédula de ciudadanía No. 52.882.565 de Bogotá D.C., en su calidad de representante legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder especial amplio y suficiente a Edgard Saavedra Clavijo identificado con cédula de ciudadanía No. 73.072.852; y/o a Oscar Luis Afanador Garzon identificado con cédula de ciudadanía No. 19.490.945; y/o a María Patricia Aragon Velez, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.510.821; y/o a Paulo Cesar Lopez Salgado, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.422.743 (los apoderados), para que actúen individual o conjuntamente en nombre y representación de la sociedad para: I) Firmar pólizas de seguros en nombre de la sociedad. II) Firmar certificaciones derivadas de las pólizas de seguros para los ramos autorizados. Los apoderados estarán facultados para negociar, suscribir, actualizar y cancelar las pólizas de seguros, junto con el otorgamiento de las certificaciones derivadas de las mismas. II) Los apoderados tienen la capacidad para sustituir y reasumir este poder.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública Número 151 de la Notaría 28 de Bogotá D.C,



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A1995475456597

7 de octubre de 2019

Hora 18:43:12

AA19954754

Página: 5 de 6

* * * * *

del 19 de febrero de 2019, inscrita el 4 de marzo de 2019 bajo el número 00041007 del libro V, compareció Manuel Francisco Obregon Trillos identificado con cédula de ciudadanía número. 79.151.183 en su calidad de representante legal de la sociedad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere poder especial amplio y suficiente a favor de Lorena Gutierrez Flores, identificada con pasaporte número g23204652 (la "apoderada"), para que actúen individual o conjuntamente en nombre y representación de la sociedad para: I) Firmar pólizas de seguros en nombre de la sociedad. II) Firmar certificaciones derivadas de las pólizas de seguros para los ramos autorizados. La apoderada estará facultada para negociar, suscribir, actualizar y cancelar las pólizas de seguros, junto con el otorgamiento de las certificaciones derivadas de las mismas. III) La apoderada tiene la capacidad para sustituir y reasumir este poder.

CERTIFICA:

**** Revisor Fiscal ****

Que por Documento Privado no. 220844 de Revisor Fiscal del 12 de octubre de 2018, inscrita el 10 de diciembre de 2018 bajo el número 02402761 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL RUIZ GERENA CLAUDIA YAMILE	C.C. 000000052822818

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 12 de octubre de 2018, inscrita el 10 de diciembre de 2018 bajo el número 02403079 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL SUPLENTE NOVA MARTINEZ ANDRES LEONARDO	C.C. 000000080074331

Que por Acta no. 88 de Asamblea de Accionistas del 27 de marzo de 2018, inscrita el 31 de mayo de 2018 bajo el número 02345290 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA	N.I.T. 000009009430484

CERTIFICA:

Que por Documento Privado de Representante Legal del 2 de diciembre de 2008, inscrito el 3 de febrero de 2009 bajo el número 01272228 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- CHUBB LIMITED

Domicilio: (Fuera Del País)

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la

referencia.

Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 11 de febrero de 2016, inscrito el 4 de abril de 2016 bajo el número 02089552 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- CHUBB LIMITED

Domicilio: (Fuera Del País)

Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2016-01-14

CERTIFICA:

Aclaración de Situación de Control

Se aclara la situación de control inscrita el 3 de febrero de 2009 bajo el número 01272228 del libro IX, informando que la sociedad matriz CHUBB LIMITED (matriz) ejerce situación de control indirectamente a través de ACE INA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD y otras filiales y/o empresas del grupo ACE sobre la sociedad de la referencia (subordinada).

Aclaración Grupo Empresarial

Se aclara que por Documento Privado Sin núm. de representante legal del 11 de febrero de 2016, inscrito el 4 de abril de 2016, bajo el número 02089552 del libro IX, en el sentido de indicar que se configura grupo empresarial entre la sociedad matriz CHUBB LIMITED y las subordinadas: CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S A y ACE SEGUROS SA.

Aclaración De Situación de Control Y Grupo Empresarial

Que por Documento Privado Sin núm. de representante legal del 7 de diciembre de 2016, inscrito el 12 de diciembre de 2016, bajo el número 02164764 del libro IX, se modifica la situación de control inscrita bajo el registro 01272228 y grupo empresarial inscrito bajo el registro 02089552 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad matriz CHUBB LIMITED ejerce situación de control y grupo empresarial de manera indirecta sobre la sociedad de la referencia a través de las sociedades: CHUBB GROUP HOLDINGS INC., CHUBB INA HOLDINGS INC., FEDERAL INSURANCE COMPANY, GREAT NORTHERN INSURANCE COMPANY, VIGILANT INSURANCE COMPANY, PACIFIC INDEMNITY COMPANY, INA CORPORATION, CHUBB INA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., AFIA FINANCE CORPORATION, INA FINANCIAL CORPORATION, BRANDYWINE HOLDINGS CORPORATION, INA HOLDINGS CORPORATION, INSURANCE COMPANY OF NORTH AMÉRICA, CENTURY INDEMNITY COMPANY, CENTURY INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY LTD.

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * El presente certificado no constituye permiso de
* * * funcionamiento en ningún caso

* * *
* * *

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A1995475456597

7 de octubre de 2019 Hora 18:43:12

AA19954754

Página: 6 de 6

* * * * *

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación Distrital son informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de marzo de 2017.

Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 17 de septiembre de 2019.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

```

*****
**      Este certificado refleja la situación jurídica de la      **
**      sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.        **
*****

```

El Secretario de la Cámara de Comercio,

Valor: \$ 5,800

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y

cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Constante Pardo A.

HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
MAGISTRADO: DRA. MARIBEL MENDOZA JIMENEZ
E. S. D.

Edict

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

RADICADO NO. 47001233300320140024100

ACCIONANTE: UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN

ACCIONADO: NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA - CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - DIANA BOVEA MENDINUETA, MIGUEL ANGEL POLO CAMPO Y JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA.


Asunto: desistimiento del recurso de apelación únicamente en relación a la excepción de ineptitud de la demanda.

CRISTIAN MERIÑO SEGRERA, abogado en ejercicio, identificado con la cedula de ciudadanía numero 85154867 de Santa Marta, portador de la tarjeta profesional numero 221.529 del C. S de la J. actuando en calidad de apoderado especial de la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA, con mi acostumbrado respeto manifiesto al despacho que atendiendo lo normado en el articulo 316 del C.G.P. Procedo a desistir **parcialmente** del recurso de apelación interpuesto en la audiencia inicial celebrada el día 11 de febrero de 2020.

El desistimiento se realiza únicamente con lo relacionado a la decisión que declaró no probada la excepción previa de ineptitud de la demanda.

En consecuencia, ruego que se surta el trámite de la apelación ante el Honorable Consejo de Estado, solamente en relación con la inconformidad planteada acerca de la excepción de caducidad.

Atentamente,


CRISTIAN MERIÑO SEGRERA
C.C: 85154867
T.P 221529 C.S. de la J.

00508

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA	
FECHA:	13 FEB 2020
HORA:	11:13 AM.
FOLIOS:	17.
FIRMA:	ANGELA S.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Magistrada sustanciadora: MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ

Santa Marta, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinte (2020).

Señores

CONSEJO DE ESTADO.
sección Tercera

Oficio No. 166-D03

Asunto: REMISIÓN EXPEDIENTE.

Rad. 47-001-2333-000-2014-00241-00 Accionante: UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE SANTA MARTA
(OBRESAN) Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS. Acción: NULIDAD Y REPARACIÓN
DIRECTA. M.P. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ.

Cordial saludo,

De conformidad con lo señalado por la providencia del once (11) de febrero de dos mil veinte (2020) se remite el expediente para los fines pertinentes.

Anexo:

1 Cuaderno N 1 con ⁵⁶⁸~~783~~ folios y 2 CD's
1 Cuaderno 2 foliado desde el ³⁶⁹~~783~~ hasta el 1180 y 7 CD's Cd: 955 a 961, 871,
783,

Lo anterior para sus fines pertinentes.

Atentamente,


LAURA EDITH MENA MONTERO
ESCRIBIENTE

CT02388699400



2 Cuadernos
7 CDs
10-CDs.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO DE ESTADO

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

47001233300020140024101

(65991)

Fecha : 06/mar./2020


SECRETARIA	GRUPO	LEY 1437 DE 2011 APELACION AUTO REPARA	*
SECCION TERCERA CONSEJO DE ESTADO	SECUENCIA	FECHA DE RADICACION	FECHA DE REPARTO
	472	06/mar./2020	06/03/2020

REFARTIDO AL DESPACHO DEL DR(A):
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ

IDENTIFICACION	NOMBRE	APELLLIDO	PARTE
12547660	GERMAN VILLANUEVA CALDERON		01 *"
555567	UNION TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN		01 *"
5587001	MINISTERIO DE JUSTICIA		02 *"
5456444	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA		02 *"
891780111	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA		02 *"
85154867	CRISTIAN MERIÑO SEGRERA		03 *"

PROCURADOR : מנהל תביעות פיצויים

CPINTOC

 EMPLEADO

cpintoc



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA

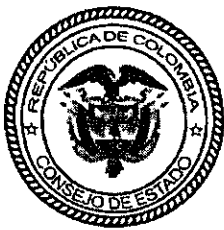
Expediente No.	470012333000201400241 01 (65991)
Tipo de Proceso	ORDINARIO - SEGUNDA INSTANCIA
Clase de Proceso	LEY 1437 REPARACIÓN DIRECTA
Naturaleza	LEY 1437 DE 2011 APELACIÓN AUTO REPARACIÓN DIRECTA
Tipo de Recurso	APELACIÓN AUTO
Actor	GERMAN VILLANUEVA CALDERÓN, UNIÓN TEMPORAL DE OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA - OBRESAN, RICARDO LUIS CANABAL GUZMÁN
Demandado	CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, MINISTERIO DE JUSTICIA

Al despacho del Honorable Consejero **MARTÍN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ**, hoy 9 de marzo de 2020, para conocer los recursos de apelación interpuestos por Juan Alberto Polo Figueroa; Diana Bovea Mendinueta; el apoderado de la Cámara de Comercio de Santa Marta; el apoderado de Chubb Seguros S.A. y la apoderada de la Universidad del Magdalena contra el auto proferido en la audiencia inicial celebrada el 11 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Magdalena.

Para decidir los recursos de apelación.

El Oficial Mayor,


JAIRO ANDRÉS CAMPOS ZULUAGA



1106

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00241-01 (65991)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta - OBRESAN

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., tres (3) de agosto dos mil veintidós (2022)

Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011
Radicación: 47001-23-33-000-2014-00241-01 (65991)
Demandante: Integrantes de la Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta
Demandado: Cámara de Comercio de Santa Marta y otros
Tema: Se confirma la decisión que declaró no probadas las excepciones de caducidad e inepta demanda.

AUTO

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido en audiencia inicial el 11 de febrero del 2020 por el Tribunal Administrativo de Magdalena que declaró no probadas las excepciones de caducidad e inepta demanda.

Este despacho es competente para decidir el presente recurso, toda vez que de conformidad con lo establecido por el artículo 125 del CPACA: <<Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de sala.>> La providencia apelada no se encuentra bajo las circunstancias descritas en los numerales 1, 2, 3 y 4 de la norma citada¹.

I. Antecedentes

1.- El 1º de agosto del 2014 los integrantes de la Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta (en adelante la <<Unión Temporal o OBRESAN>>) presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, la Cámara de Comercio de Santa Marta, la Universidad del Magdalena y los señores Diana Bovea Mendinueta, Miguel Ángel Polo Campo y Juan Alberto Polo Figueroa, en su calidad de árbitros. Pretendieron que se

¹ Los numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 243 del CPACA hacen referencia a los siguientes autos: << (1) El que rechace la demanda, (2) El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite, (3) El que ponga fin al proceso y, (4) El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público>>.



declarara su responsabilidad por los daños causados por el error judicial originado con ocasión de la expedición extemporánea del laudo arbitral del 22 de agosto del 2011.

2.- Fundamentaron sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:

2.1.- El 9 de febrero del 2010 los integrantes de la Unión Temporal presentaron demanda arbitral contra la Universidad del Magdalena para que se declarara el rompimiento del equilibrio económico del contrato de obra No. 146 suscrito el 30 de diciembre de 2005 y se ordenara a la convocada a restablecerlo.

2.2.- Mediante auto del 13 de abril de 2011 el tribunal de arbitramento decidió, de forma indebida, prorrogar el término del trámite arbitral por tres meses. El 22 de agosto del 2011 se llevó a cabo la audiencia para dictar el laudo. En el curso de la audiencia, la parte convocante solicitó al tribunal que declarara la cesación de sus funciones por vencimiento del término para proferir el laudo. Mediante auto dictado en la referida audiencia, el tribunal se abstuvo de decretar la cesación de sus funciones. En esta misma fecha profirió el laudo mediante el cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

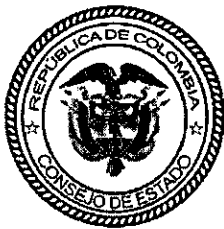
2.3.- Tanto la convocante como la convocada presentaron recurso de anulación contra el laudo. La convocada fundamentó su recurso en la causal del numeral 5° del artículo 163 del Decreto 1818 de 1993, consistente en haberse proferido el laudo por fuera del término fijado para el trámite arbitral. Mediante sentencia del 25 de abril de 2012, el Consejo de Estado anuló el laudo con fundamento en dicha causal.

2.4.- Haber proferido un laudo por fuera del término constituye un error judicial que causó un daño antijurídico a la parte convocante en el proceso arbitral, el cual debe ser reparado por las demandadas.

3.- La Cámara de Comercio de Santa Marta contestó la demanda. Propuso, entre otras, las excepciones de inepta demanda y caducidad. Al respecto señaló que:

3.1.- La demanda es inepta porque, a pesar de que el Tribunal Administrativo de Magdalena ordenó corregir el libelo, la parte no lo hizo oportunamente y la radicó ante una autoridad distinta. El auto que ordenó la corrección de la demanda fue notificado el 21 de agosto del 2014 y, en ese orden de ideas, el término para subsanar se vencía el 4 de septiembre del 2014. Sin embargo, obra prueba en el expediente de que la corrección fue radicada ante la Procuradora 155 Judicial Administrativa el 2 de septiembre del 2014, quien la remitió el 5 de septiembre del 2014 al Tribunal Administrativo de Magdalena.

3.2.- De conformidad con lo afirmado en la demanda, el hecho generador del daño es el laudo arbitral. Por lo tanto, dado que este se profirió el 22 de agosto



1187

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00241-01 (65991)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta - OBRESAN

del 2011, el plazo para presentar la demanda corrió hasta el 23 de agosto del 2013. En consecuencia, la demanda es extemporánea.

4.- La Universidad del Magdalena contestó la demanda y propuso la excepción de caducidad. Indicó que la solicitud de conciliación presentada el 6 de mayo de 2014 estaba incompleta, por lo cual no suspendió el término para accionar.

5.- Por último, los señores Diana Bovea Mendinueta y Juan Alberto Polo Figueroa también propusieron la excepción de caducidad al contestar la demanda. Argumentaron que el término de caducidad debía contabilizarse desde el 13 de abril de 2011, fecha en que el tribunal expidió el auto que prorrogó el término del trámite arbitral. Además, no debía tenerse en cuenta la presentación de la solicitud de conciliación para efectos de la suspensión del término de caducidad, pues los árbitros no habían sido llamados a dicho trámite.

6.- El 11 de febrero del 2020 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual el Tribunal Administrativo de Magdalena negó las excepciones de inepta demanda y caducidad.

6.1.- En relación con la ineptitud de la demanda señaló que el auto que inadmitió la demanda se notificó el 21 de agosto del 2014, de modo que los tres días de ejecutoria vencían el 26 de agosto siguiente. Así, el término de diez días para subsanar la demanda corrió entre el 27 de agosto del 2014 y el 5 de septiembre del 2014. Por lo cual la subsanación fue oportuna.

6.2.- Respecto de la caducidad señaló que el término debe contarse a partir del día siguiente al que quedó ejecutoriada la sentencia de anulación del Consejo de Estado. Así, el término corrió entre el 11 de mayo de 2012 y el 11 de mayo de 2014. Antes de vencerse el término, el 6 de mayo de 2014, los demandantes presentaron solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. La constancia de no acuerdo fue expedida el 31 de julio de 2014, por lo cual la demanda presentada el día siguiente es oportuna.

7.- La Cámara de Comercio de Santa Marta interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que formuló los siguientes reparos:

7.1.- Insistió en que la demanda fue subsanada extemporáneamente. El término para subsanarla debía empezar a contar a partir del 22 de agosto de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del CGP. Por lo tanto, el término vencía el 4 y no el 5 de septiembre de 2014. Así las cosas, en los términos del artículo 170 del CPACA, el tribunal debió haber rechazado la demanda.

7.2.- Respecto de la caducidad, señaló que está debía analizarse en la sentencia y no en esta oportunidad.



8.- El doctor Juan Alberto Polo Figueroa apeló la decisión de declarar no probada la caducidad de la acción. Insistió en que el término de caducidad debía contarse a partir de la providencia contentiva del error, es decir, desde el auto del 13 de abril de 2011 mediante el cual se prorrogó el término del trámite arbitral.

9.- La Universidad del Magdalena también apeló la decisión sobre la caducidad y reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda sobre este punto.

10.- Los apoderados de Diana Bovea, Miguel Ángel Polo y ACE Seguros S.A. coadyuvaron los recursos.

11.- De los recursos se corrió traslado a los demandantes quienes afirmaron que: (i) estos no fueron debidamente sustentados; y (ii) sobre la ineptitud de la demanda por no haberse subsanado en tiempo ya existe una decisión del Consejo de Estado en sede de tutela.

II. Consideraciones

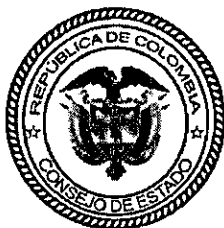
12.- El despacho confirmará la decisión del tribunal de declarar no probadas las excepciones de caducidad e inepta demanda. En relación con la caducidad, el término de dos años debe contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia de anulación del Consejo de Estado, por lo que la demanda fue oportuna. Respecto de la ineptitud de la demanda, se trata de un asunto que ya fue decidido por el tribunal al no reponer el auto que admitió la demanda y sobre el que existe, además, un pronunciamiento en sede de tutela.

A.- La caducidad de la acción

13.- El despacho considera que le asiste razón al tribunal al estimar que el término de caducidad debe computarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia de anulación del Consejo de Estado. Si bien es cierto que la providencia contentiva del error corresponde al auto del 13 de abril de 2011, mediante el cual el tribunal arbitral prorrogó indebidamente el término de duración del trámite, también es cierto que el daño alegado solo se consolidó para los demandantes cuando el Consejo de Estado anuló el laudo por haberse proferido por fuera del término. Es en esta actuación donde se constata el error y se deja sin efectos el laudo. En ausencia de la decisión de anulación, no existiría ningún daño que los demandantes pudieran reclamar.

14.- En este sentido, el término de 2 años de la acción de reparación directa corrió, en principio, entre el 11 de mayo de 2012 (día siguiente a la fecha en que quedó ejecutoriada la decisión de anulación²) y el 11 de mayo de 2014. El 6 de mayo del 2014 los demandantes presentaron solicitud de conciliación ante la

² Cuaderno No. 2, folio 644.



1198

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00241-01 (65991)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta - OBRESAN

Procuraduría General de la Nación, suspendiendo el término de caducidad.³ El Ministerio Público expidió la constancia de no acuerdo el 31 de julio de 2014.⁴ Por lo tanto la demanda presentada el día siguiente, 1° de agosto de 2014, es oportuna⁵.

15.- Respecto de los demás reparos formulados por los apelantes bastará mencionar que: (i) el artículo 180 numeral 6 del CPACA dispone expresamente que en la audiencia inicial se resolverá sobre la caducidad, lo que no impide que, de encontrarse probada con posterioridad, esta pueda ser declarada en la sentencia; y (ii) la supuesta presentación incompleta de la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación no tiene ninguna relevancia respecto de la caducidad de la acción.

B.- La ineptitud de la demanda

16.- Afirma la Cámara de Comercio de Santa Marta que la demanda es inepta porque los demandantes la subsanaron por fuera del término legal y ante otra entidad distinta al tribunal. Sobre este punto, el despacho resalta que la ineptitud de la demanda, en los términos del artículo 100 de CGP, únicamente se configura por indebida acumulación de pretensiones o por ausencia de requisitos formales, situaciones que no se presentan en este asunto.

17.- En todo caso, la oportunidad en la presentación de la subsanación de la demanda ya fue un tema analizado por el Tribunal Administrativo de Magdalena al resolver el recurso de reposición interpuesto por la Cámara de Comercio de Santa Marta contra el auto admisorio de la demanda, decisión que se encuentra ejecutoriada⁶. Aunado a lo anterior, el asunto también fue objeto de estudio por parte del Consejo de Estado al decidir desfavorablemente la acción de tutela interpuesta por la Cámara de Comercio de Santa Marta contra la providencia anterior⁷.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE el auto proferido en audiencia inicial el 11 de febrero del 2020 por el Tribunal Administrativo del Magdalena en virtud del cual se declararon no probadas las excepciones de caducidad e inepta demanda.

³ Cuaderno No. 1, folio 30 B.

⁴ Cuaderno No. 1, folio 30 G.

⁵ Cuaderno No.1, folio 1.

⁶ Cuaderno No. 2, folios 683 a 685.

⁷ Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de noviembre de 2014, exp. 11001-03-15-000-2015-01597-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.



Radicación: 47001-23-33-000-2014-00241-01 (65991)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales de Santa Marta - OBRESAN

SEGUNDO: La presente providencia será notificada mediante estado electrónico, en atención a lo dispuesto por el artículo 201 del CPACA modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021. En el sistema de información SAMAI se encuentran registrados los correos electrónicos de los apoderados de las partes. Se **ADVIERTE** a los sujetos procesales que deberán **INDICAR** cualquier modificación en la información de los canales de comunicación electrónica a la dirección ces3secr@consejodeestado.gov.co

TERCERO: En firme esta providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2022

Oficio n.º DEV-2022-2689-MAAO

Señores:

Tribunal Administrativo del Magdalena

Calle 20 No. 2A-20, Palacio de Justicia

Teléfono: 350 262 46 10

Santa Marta, Magdalena

Ref. Expediente: 47001-23-33-000-2014-00241-01 (65991)

Demandante: German Villanueva Calderón.

En atención a lo decidido en el proveído del 3 de agosto de 2022, me permito devolver el expediente de la referencia, el cual había sido enviado a esta Corporación para conocer del recurso de apelación presentado en contra de la providencia proferida por ese tribunal el 11 de febrero de 2020.

El expediente consta de 3 cuadernos y 10 CD-ROM, que se relacionan así:

Cuadernos	Folios
Principal Consejo	1162-1188 y 1 CD-ROM
No.1	569-1161 y 9 CD-ROM
No.2	1-568

Precisado lo anterior, y teniendo en cuenta que el tribunal de origen **ya tiene implementado** el sistema SAMAI, debe indicarse que, a partir de junio de 2020, este proceso contiene documentos electrónicos y digitalizados con sus respectivas actuaciones judiciales, razón por la cual, para visualizarlos y descargarlos debe ingresar a la mencionada plataforma y consultar con el número de radicación de su instancia, donde se presentará la opción denominada «*gestión en otras corporaciones*» y luego seleccionar el proceso que desea consultar dependiendo del tipo de proceso y autoridad judicial.

Por último, se informa que el proceso se remite en las mismas condiciones en las que se recibió; salvo las actuaciones realizadas en esta instancia.

Sin otro particular, con toda consideración,


Esteban David Rivera Bueno
Oficial Mayor

Elaborado por: maa0

*Recibido
Gloria Lopera
21-10-2022
3 de octubre*